



Brigadas Internacionales de Paz



LA VALENTÍA TIENE MUCHAS CARAS

Celebración de los 25 años de la Declaración de la ONU sobre lxs Defensorxs de Derechos Humanos

INTRODUCTION

En 2023 se cumple el 25 aniversario de la Declaración de la ONU sobre lxs Defensorxs de los Derechos Humanos, un documento histórico que establece los derechos de estas personas y las obligaciones de los Estados respecto a su protección. La Declaración fue el primer documento de la ONU en reconocer la importancia y legitimidad del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. Aunque la Declaración en sí no es jurídicamente vinculante, contiene principios y derechos que se basan en normas de derechos humanos consagradas en otros instrumentos que sí lo son. Además, tiene una fuerza moral considerable y refleja el compromiso de los Estados a su aplicación.

A pesar del importante significado de la Declaración y de su amplio apoyo, su aniversario también nos recuerda los retos a los que siguen enfrentándose a diario los defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan en contextos cada vez más hostiles. Front Line Defenders documentó más de 400 homicidios selectivos solo en 2022.

El mayor número de homicidios deliberados directamente relacionados con la defensa de los derechos humanos registrado en un año hasta la fecha. Además de la violencia física, los defensores y defensoras siguen expuestos muchos otros riesgos, como difamación, campañas de desprestigio, criminalización y otras formas de violencia psicológica.

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) lleva más de 40 años proporcionando protección y apoyo a las personas defensoras en situaciones en las que son amenazadas y atacadas. Por ello, queremos conmemorar juntxs el aniversario de la Declaración destacando la importante labor de los defensores de los derechos humanos acompañados por PBI. ¿Cómo comenzó su camino como defensores de derechos humanos, qué significa para ellxs su trabajo y a qué retos se enfrentan en su labor? Los siguientes estudios de caso intentan ofrecer una visión del trabajo de las personas acompañadas, aquellas personas que dan vida a la Declaración de la ONU sobre lxs DDH.

EXITOS Y OBSTÁCULOS ACTUALES DE LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

Guatemala: Defendemos la tierra, defendemos nuestros territorios, defendemos la vida

Cuando se visita por primera vez los departamentos de Alta y Baja Verapaz en Guatemala, llama la atención la belleza de sus paisajes, pues abundan los ríos y los bosques lluviosos que en sus partes bajas se transforman en selva. En este territorio habitan desde hace más de cinco siglos, entre otros, los pueblos Mayas Q'eqchi' y Poqomchi'. Sin embargo, esta belleza del paisaje contrasta con la historia de abusos y sufrimiento a la que se han visto sometidos estos pueblos originarios. Destaca el despojo de sus tierras, llevado a cabo por terratenientes cafeteros a partir del siglo XIX. Más tarde, los intereses económicos de las élites se fueron transformando y, actualmente, la mayor amenaza para estos pueblos son megaproyectos hidroeléctricos y agroindustriales.

Frente a esta situación, las comunidades afectadas se han venido organizando desde hace mucho tiempo, para defender su derecho a la tierra y a la vida, así como para exigir el respeto a sus derechos humanos. Es importante señalar que esta es una de las regiones de Guatemala con mayor índice de pobreza y extrema pobreza.

Sandra Calel es defensora Poqomchi' e integrante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC). Su trayectoria en la defensa de la tierra, los territorios ancestrales, la cultura maya y los derechos de los pueblos indígenas es larga.



Sandra comparte que “para las familias es un gran reto lograr acceder a la tierra, especialmente para las mujeres. Y el acceso a las tierras para nosotras es vital, pues hay muchas mujeres madres solteras, viudas y madres abandonadas porque sus esposos han emigrado.

Tras muchos años de lucha logramos la certeza jurídica de la tierra para la comunidad Naranjales. Les entregaron la tierra como pago a los jornaleros que durante décadas trabajaron esa tierra sin recibir pago a cambio, como un reconocimiento a sus derechos laborales. Gracias a este logro ya no temen ser desalojadas, pero costó 20 años conseguirlo.

Otro logro fue suspender el desalojo de la comunidad Lajeb Kej, gracias al apoyo de una delegación de abogados y abogadas internacionales a quienes pedimos que nos apoyasen. Se logró parar el desalojo y eso es un éxito para nosotras como defensoras, tal vez no el 100% pero fue un gran logro en el que participaron mujeres, ancianos y jóvenes que se movilizaron para exigir sus derechos. Así se logró ponerle fin al desalojo”.

Lesbia Artola, defensora Q'eqchi' integrante del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) – Región Las Verapaces, también con una larga trayectoria de lucha, señala que “es un



reto para nosotras lograr defender nuestros derechos, porque lamentablemente tenemos un sistema para el cual parece que ser mujer indígena y defensora es un delito. Nuestro vivir día a día es un reto. Que nosotras sigamos vivas es un reto. Es un reto que nosotras sigamos luchando con fuerza y tengamosesa militancia y esa visión y estemos al frente de toda esta lucha.”

Para ambas defensoras es motivo de satisfacción y orgullo la fuerza que han logrado las mujeres en sus territorios. Resaltan el “empoderamiento de las mujeres, su liderazgo tan exitoso y lleno de riqueza”. Gracias a ello, observa Lesbia, lograron en 2019 que en la finca Flecha Camuy, se lograra asegurar jurídicamente la tierra para 81 familias, viéndose beneficiadas 81 mujeres y 81 hombres integrantes de la organización. Fue un éxito fundamental, un gran cambio, porque no solo se logró la certeza jurídica, sino también el que hombres y mujeres hayan logrado igual derecho a la tierra”.

PBI Guatemala acompaña a Sandra y a Lesbia, así como al resto de compañeras y compañeros que forman parte de estas organizaciones.

Honduras: Compromiso de empoderamiento

A partir del golpe de Estado que sacudió Honduras en 2009, la violencia hacia la comunidad LGTBI+ ha ido en aumento. Según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), sólo entre 2017 y 2022 se registraron 194 asesinatos de personas de la diversidad sexual. La violencia no sólo se traduce en asesinatos sino también en un trato discriminatorio en centros de salud, en espacios laborales y en medios de comunicación. La violencia en sus varias expresiones hace que muchas personas del colectivo se sientan obligadas a salir del país. En este contexto desafiante, la defensa de los derechos LGTBI+ se vuelve un trabajo arriesgado. A pesar de ello, organizaciones como la Asociación LGTB Arcoíris de Honduras y el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI – SOMOS CDC se han mantenido firmes en su trabajo para la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa.

La Asociación LGTB Arcoíris de Honduras nació a la sombra de los árboles del Parque El Obelisco, en Comayagüela, donde las primeras diez personas voluntarias de la organización se reunieron y se dieron cuenta de que lo que realmente necesitaban era una casa con las puertas abiertas para cualquier persona de la diversidad sexual. Fundaron Arcoíris el 1 de agosto de 2003, con el compromiso de empoderar a la comunidad LGTBI+ en temas de promoción de salud integral, promoción de los derechos humanos e incidencia política, entre otros.

Hoy en día, Arcoíris representa una casa segura para unas 350 personas que apoyan de forma voluntaria en las actividades de la organización. Además, ha sido una escuela de aprendizaje para muchas personas: según José Figueroa, integrante de la organización, “Arcoíris aparte de que te enseña a crecer como persona, también te enseña a luchar, te enseña que tienes que seguir apoyando y apoyando a los miembros y miembros que lo necesitan.” Donny Reyes, coordinador técnico, concluye que “sabemos que hemos apoyado a muchas vidas, jóvenes, hombres, mujeres, niños y niñas que han pasado por aquí, que vienen y nos dicen gracias. Hemos hecho la tarea. Hemos hecho lo que corresponde.”

El Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI – SOMOS CDC nació el 18 de agosto de 2007, aunque fue conocido hasta 2015 bajo el nombre de Asociación Jóvenes en Movimiento (AJEM). Según Elloy Ponce, miembro y fundador de la organización, los principales logros de SOMOS CDC también se marcan a partir de 2015: “Fue cuando identificamos otras líneas de trabajo y de importancia para las personas LGTBI como la inclusión económica y política. Pasamos de ser una organización emergente a ser una organización referente por fortalecer a otras organizaciones LGTBI emergentes en la parte técnica, administrativa y mercantil.”

En palabras de Elloy Ponce, SOMOS CDC enfoca su trabajo en la “elaboración y consenso de propuestas de leyes y políticas públicas para enfrentar los desafíos de la exclusión social, política, económica y cultural y la violación de los derechos humanos”.



El valioso trabajo de SOMOS CDC sin duda ha ayudado a la comunidad LGTBI+ a mejorar su visibilidad y participación política en el país. Según Grecia O’Hara, integrante de la organización, “tenemos el poder y la voz. No pedimos privilegios, sino que pedimos nuestros derechos”.

El acompañamiento de PBI, en el caso de la Asociación LGTB Arcoíris de Honduras desde 2015 y en el caso de SOMOS CDC desde 2022, ha permitido aumentar la visibilidad de las iniciativas de la comunidad LGTBI+ en Honduras y ha servido para el fortalecimiento organizativo en temas de seguridad y protección. En los últimos años, PBI ha dado abrazos y palabras de ánimo y amor, pero ha recibido lo mismo de vuelta, porque si hubiera que destacar una cosa de Arcoíris y SOMOS CDC sería su enorme y contagioso compromiso. En palabras de Donny, “no luchamos porque queremos ser mártires ni porque queremos hacer parte de la estadística, sino porque deseamos vivir en dignidad, tener el derecho de vivir, de amar y de ser feliz como cualquier ser humano.”

Kenia: Defendiendo la dignidad

Judith Adhiambo Ochieng es una defensora de los derechos humanos en Langata, Nairobi.



En el corazón de la zona urbana de Langata, en Nairobi, Judith emerge como guardiana de los derechos humanos. Ella no sólo es defensora de derechos humanos, sino también asistente jurídica y apasionada defensora de los derechos de la mujer. Su trayectoria es un testimonio del espíritu indomable de quienes se dedican a mejorar sus comunidades. Judith creció en Kibera y fue testigo diario de la cruda realidad de la violencia de género y las violaciones de los derechos humanos.

Al principio, aceptó estas injusticias como algo normal, pero su interacción con organizaciones de la sociedad civil le abrió los ojos al hecho de que la violencia de género era una violación de los derechos humanos. La violencia postelectoral de 2017 sirvió de catalizador, impulsando a Judith a pasar a la acción. Reconoció que documentar estas violaciones podría generar cambios, lo que la llevó a cofundar el Centro de Asistencia Jurídica Lang'ata (LLAC).

Como defensora de derechos humanos, la vida de Judith está llena de retos y riesgos. Su trabajo la pone a menudo en el punto de mira de quienes se sienten amenazados por su defensa. Sus experiencias le han permitido comprender las complejidades de los casos

de violencia de género, obligándola a desenvolverse en situaciones delicadas en las que defiende la causa de los supervivientes. Uno de los retos más importantes a los que se enfrentan Judith y LLAC es la amenaza constante a su seguridad. Tratar casos de violencia de género puede dar lugar a represalias por parte de los implicados, lo que pone en peligro la vida de los defensores. Garantizar la seguridad de lxs voluntarixs es un reto constante. Las limitaciones económicas son otro obstáculo, ya que el LLAC funciona con un presupuesto muy reducido y depende de voluntarios y de servicios jurídicos gratuitos.

A pesar de estos obstáculos, Judith y el LLAC han logrado un éxito notable. Han formado y graduado a 21 asistentes jurídicos para servir a la comunidad, se han asociado con universidades y han abierto sus puertas a abogados que ofrecen servicios pro bono. En las clínicas de asistencia jurídica han llegado hasta los más vulnerables, garantizándoles el acceso a la justicia. Su impacto se extiende más allá de su comunidad inmediata, creando un efecto dominó.

A través de su asociación con Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Judith aprendió que ser defensora de los derechos humanos es un viaje continuo sin un punto final definido. Las herramientas proporcionadas por PBI han reforzado su capacidad, permitiéndole dirigir el LLAC con eficacia. También ha resaltado la importancia de construir una red de organizadores comunitarios para crear un frente unificado en la lucha por la justicia.

Kenia: De superviviente a defensora

Catherine Wangui, conocida cariñosamente como Kate en su comunidad de Kibra, no es sólo madre de dos hijos; es una intrépida defensora de los derechos humanos y una feminista inquebrantable. Su viaje de superviviente a defensora de la justicia es una extraordinaria historia de valor y resistencia.



La motivación de Kate para convertirse en defensora de derechos humanos estaba profundamente arraigada en su experiencia personal. Fue víctima de la violencia electoral de 2007/08 en Kenia, una experiencia que la dejó marcada.

Sin embargo, fue el hecho de ser testigo de las violaciones sufridas por sus amigos cercanos lo que la impulsó a pasar a la acción. Más tarde se dio cuenta de que necesitaba conocimientos y herramientas para luchar por la justicia, tanto para sí misma como para los demás.

Su camino la llevó a unirse a una organización llamada Mujeres de Kibera por la Paz y la Equidad, centrada en la reconciliación y la sanación tras la violencia electoral. Kate, que en un principio albergaba rencor, fue comprendiendo poco a poco la importancia del perdón y de la responsabilidad individual.

Quería ayudar a otrxs a escapar del ciclo de tribalismo, amargura e injusticia. El trabajo de Kate como defensora no estuvo exento de dificultades, tuvo que hacer frente a amenazas, gestionar casos complejos y, en ocasiones, ponerse ella misma en peligro.

Uno de sus logros más significativos fue conseguir justicia para un niño que había sufrido abusos sexuales por parte de su profesor. Movilizó a otrxs defensorxs de derechos humanos, llevó a la víctima al hospital y se aseguró de que el agresor tuviera consecuencias legales. Este fue un punto de inflexión en su carrera, que reafirmó el papel vital de las personas defensoras de derechos humanos en sus comunidades.

En este viaje conoció a Brigadas Internacionales de Paz (PBI), que ofrecía formación y apoyo a lxs DDH. La formación no solo la dotó de valiosas habilidades, sino que también le permitió encontrar su voz como activista, centrándose principalmente en los derechos de las mujeres y las niñas. Se dio cuenta de la importancia de defender a lxs que no tienen voz. PBI también fomentó el reconocimiento de su labor fuera del país y la puso en contacto con agentes internacionales de derechos humanos.

Nicaragua: Defender los derechos humanos en el exilio

Fernanda Martínez es una de las más de 400 mil personas nicaragüenses que se han visto obligadas a salir de su país después de la crisis socio política del 2018. Fer, como le dicen de cariño, estudió Derecho y Relaciones internacionales y desde muy joven se

vinculó a la defensa de los Derechos Humanos. Su principal escuela, después de la Universidad fue la Coordinadora Civil, una instancia de articulación de más de 100 organizaciones del movimiento social que existía desde 1998. Allí trabajó en la formación de jóvenes activistas y en el diseño de campañas de incidencia social, además de representar a la organización en espacios de articulación nacional e internacional.



Cuando la policía y los paramilitares comenzaron a reprimir a los jóvenes que se manifestaban en las protestas de abril 2018, no dudó en activarse para darles apoyo y soporte. Por esa razón comenzó a ser ella misma víctima de persecución, hostigamiento y amenazas. En un primer momento esa persecución se dirigió a la Coordinadora Civil, pero luego fue avanzando hasta sentirla personalmente con vigilancia alrededor de su casa. Para salvar su vida y proteger a su familia, se vio obligada a desplazarse a Costa Rica, donde solicitó refugio político y vive desde hace más de 5 años.

Continuar en la defensa de los Derechos humanos en el exilio ha sido un camino lleno de obstáculos. Sin embargo, Fer siempre tuvo claro que estar organizada era la mejor forma de enfrentarlos. Por eso, fundó junto con un grupo de mujeres refugiadas la Red de Mujeres

Pinoleras (REMUPI). Es una organización que se inspira en los principios de la Economía Feminista para seguir defendiendo los derechos de las mujeres en el exilio, a la vez que construyen colectivamente estrategias de sostenibilidad económica. La REMUPI es un espacio de solidaridad, empoderamiento, denuncia de la violencia, defensa de derechos y promoción de la cultura nicaragüense. Fernanda es una de las coordinadoras de la Red, para la cual trabaja voluntariamente, mientras impulsa también un emprendimiento de cosméticos naturales, que le permite sostenerse económicamente en el país de acogida, ya que no ha podido ejercer su profesión de forma remunerada, debido a las restricciones para validar sus títulos, situación compartida con otras defensoras de la REMUPI.

Para Fer, defender los DDHH desde el exilio es promover la cultura de paz y el respeto de los derechos fundamentales de las personas en general sin distingo alguno, abogar por los derechos de personas que viven situaciones de vulnerabilidad y represión y que no pueden hablar por el contexto y crear conciencia de que es importante vivir en un mundo más humanizado. Muchos retos tiene por delante para seguir en esta labor. Uno es seguir enfrentando las amenazas y persecución política, la preocupación porque su familia se sienta en peligro por el hecho de que denuncie lo que vive ella o las mujeres en general. Pero el mayor reto es la condición de desplazada de forma forzada porque al migrar las prioridades comienzan a cambiar y hay un momento donde hay que trabajar en la autosostenibilidad para poder seguir haciendo activismo y defensa de derechos humanos.

Brigadas Internacionales de Paz ha acompañado a la REMUPI desde su fundación, tanto en el fortalecimiento organizativo, como en el apoyo psicosocial a las defensoras y en la incidencia política. Fernanda nos comparte que desde que se graduó de Relaciones Internacionales, soñaba con hacer una carrera diplomática para defender los Derechos Humanos en instancias internacionales. Ese sueño se vio truncado con el exilio. Sin embargo, este año estuvo representando a la REMUPI en una gira de incidencia internacional, acompañada por PBI y pudo hacer una declaración en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para denunciar la violencia contra las mujeres en Nicaragua, por lo que de alguna forma cumplió su sueño, aunque desde otro rol, como defensora.